



SALA QUINTA DE DECISIÓN LABORAL

Proceso: ORDINARIO LABORAL
Radicado: 05001-31-05-001-2017-00884-02 (O2-23-204)
Demandante: ROGELIO DE JESÚS VELÁSQUEZ ECHAVARRÍA
Demandadas: TdeA y COLPENSIONES
Procedencia: JUZGADO PRIMERO LABORAL DEL CIRCUITO DE MEDELLÍN
Asunto: LIQUIDACIÓN DE COSTAS

En Medellín, a los veinticinco (25) días del mes de septiembre del año dos mil veintitrés (2023), la **Sala Quinta de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín**, integrada por los magistrados CARLOS ALBERTO LEBRÚN MORALES, SANDRA MARÍA ROJAS MANRIQUE y VÍCTOR HUGO ORJUELA GUERRERO, quien actúa como magistrado sustanciador, procede a dictar decisión de segundo grado, dentro del proceso ORDINARIO LABORAL promovido por ROGELIO DE JESÚS VELÁSQUEZ ECHAVARRÍA en contra del TECNOLÓGICO DE ANTIOQUIA (TdeA) y COLPENSIONES E.IC.E. conocido bajo el radicado único nacional 05001-31-05-001-2017-00884-01 (O2-21-013), a fin de resolver el recurso de apelación impetrado por ROGELIO DE JESÚS VELÁSQUEZ ECHAVARRÍA y el TdeA, en contra de la decisión adoptada el 21 de julio de 2023, y mediante la cual la juzgadora de instancia aprobó la liquidación de costas y agencias en derecho.

1. ANTECEDENTES

El señor ROGELIO DE JESÚS VELÁSQUEZ ECHAVARRÍA depreca que se declare que entre el TdeA y su fallecida cónyuge NUBIA INÉS ARBOLEDA GAMBOA existió un contrato de trabajo del 18 de enero de 1996 al 30 de mayo de 2003, y en consecuencia, se condene a dicha entidad a pagar a COLPENSIONES los aportes en pensiones que le correspondían y se condene a COLPENSIONES, o subsidiariamente, al TdeA a pagarle la pensión de sobrevivientes causada por su difunta cónyuge, los intereses moratorios, o en subsidio, la indexación junto con las costas procesales; controversia que se dirimió en primera instancia por el Juzgado Primero Laboral del Circuito de Medellín el 07 de diciembre de 2020 (docs.01 a 03, subcarp.03, carp.01), el que declaró que entre la señora Nubia Inés Arboleda Gamboa y el TdeA, existieron 15 contratos de trabajo, dispensando el pago del cálculo actuarial a cargo de la institución educativa, a la vez de gravarla en costas en la suma de siete \$ 1.755.606, a favor del demandante; sentencia que fue

revocada parcialmente por esta Sala Quinta de Decisión Laboral del Tribunal Superior de Medellín, el 21 de mayo de 2021 (doc.07, subcarp.05, carp.01), encontrando que se suscitaron 14 contratos de trabajo y reconociendo la pensión de sobrevivientes en favor del señor ROGELIO DE JESÚS VELÁSQUEZ ECHAVARRÍA en cuantía inicial a un SMLMV y la indexación; y con la que se infligió condena en costas al TdeA en la suma equivalente a \$ 908.526.

1.1. Trámite de Primera Instancia

El Juzgado Primero Laboral del Circuito de Medellín, en fecha 21 de julio de 2023 (doc.08, carp.01) emitió auto de cúmplase lo dispuesto por la Corte Suprema de Justicia, y dispuso que por la secretaría del despacho se liquidaran las costas del proceso, las que liquidó en cuantía de \$ 17.700.199, por concepto de agencias en derecho, discriminadas de la siguiente manera: a cargo del TdeA y a favor del señor ROGELIO DE JESÚS VELÁSQUEZ ECHAVARRÍA, la suma de \$ 6.191.673 por la primera instancia, \$ 908.526 por la segunda instancia y \$ 5.300.000 en sede extraordinaria de casación; liquidación sobre la que se impartió aprobación en la misma fecha.

1.2. Recurso de Apelación

Inconforme con la decisión antes descrita, la apoderada judicial del TdeA (doc.10, carp.01), interpuso recurso de apelación, en solicitud de modificar el valor de las costas tasadas en primera instancia, como quiera que, a su juicio, se incluyó como valor de las agencias en derecho un valor diferente al que fuera fijado en la sentencia de primer grado, razonando que *“...al incluir un valor diferente -superior- se está desconociendo lo ordenado en la propia sentencia y, de contera, modificando uno de sus numerales sin que ello resulte posible dado el efecto de la cosa juzgada de la que está revestida”*.

Por su parte, el poderhabiente del promotor de la litis pregonada se fijó el valor de las agencias en derecho de primer nivel en cuantía igual a \$ 10.782.792, tomando en consideración que a junio de 2023, el monto del retroactivo pensional concedido a su representado asciende a \$ 142.783.904 (doc.11, carp.01).

1.3. Trámite de Segunda Instancia

Los recursos de apelación fueron admitidos por esta corporación el 04 de septiembre de 2023 (doc.02, carp.02), y se corrió traslado a las partes en el mismo proveído para que, de conformidad con lo previsto en el numeral 1º del artículo 13 de la Ley 2213 de

2022, presentaran alegatos de conclusión por escrito, de estimarlo del caso; oportunidad en la cual el deprecante se ratificó en los argumentos sustento de los yerros señalados en el recurso de alzada (doc.03, carp.02), mientras que el TdeA guardó silencio.

2. ANÁLISIS DE LA SALA

Surtido el trámite en esta instancia, sin observar causal de nulidad que invalide lo actuado, procede la Sala a resolver el recurso de apelación interpuesto por el extremo litigioso por activa, advirtiéndose que de conformidad con el principio de consonancia consagrado en el artículo 66A del CPTSS, el estudio del auto impugnado se limitará a los puntos de inconformidad materia de alzada.

2.1. Problema Jurídico

El punto sustantivo de debate en la presente Litis se contrae a determinar si la liquidación de las agencias en derecho causadas en el trámite de la primera instancia del proceso ORDINARIO LABORAL promovido por ROGELIO DE JESÚS VELÁSQUEZ ECHAVARRÍA en contra del TdeA y COLPENSIONES E.I.C.E., se ajusta a la normativa que regula la materia.

2.2. Tesis de la Sala

El sentido del fallo de esta Corporación será modificadorio, en cuanto que el monto que por agencias en derecho se fijaron en la primera instancia, no responden a los criterios establecidos en el artículo 5 del Acuerdo PSAA 16-10554 de 2016, de conformidad con los planteamientos que pasan a exponerse:

2.3. Solución del Problema Jurídico Planteado

Siguiendo los lineamientos de la jurisprudencia nacional esta Corporación reliva que las costas, esto es, la erogación económica que corresponde efectuar a la parte que resulte vencida en un proceso judicial, está conformada por dos rubros distintos: las expensas y las agencias en derecho. Las primeras corresponden a los gastos surgidos con ocasión del proceso y necesarios para su desarrollo, descritos genéricamente en el numeral 3° del artículo 366 CGP como todos los demás gastos hechos por la parte beneficiada con la condena. Por otra parte, las agencias en derecho tienen por finalidad la compensación por los gastos de apoderamiento en que incurrió la parte vencedora, aunque pueden

fijarse sin que necesariamente hubiere mediado la intervención directa de un profesional del derecho (CC sentencia C-089 de 2002).

De conformidad con lo indicado en el artículo 365 del CGP, las costas procesales, comprensiva de las expensas y las agencias en derecho, se imponen a cargo de la parte vencida, a la que se le resuelva desfavorablemente el recurso de apelación, casación, queja, súplica, anulación o revisión que haya propuesto, y a quien se le resuelva de manera desfavorable un incidente, la formulación de excepciones previas, una solicitud de nulidad o de amparo de pobreza.

Las costas son objeto de liquidación por el tribunal o juzgado de la respectiva instancia o recurso, aplicando las tarifas establecidas por el Consejo Superior de la Judicatura para la fijación de las agencias en derecho y teniendo en cuenta la naturaleza, calidad y duración de la gestión profesional desplegada, así como la cuantía de las condenas, sin exceder el tope máximo de dichas tarifas, como se previno en el artículo 366 CGP. Para los anteriores efectos el Consejo Superior de la Judicatura dispuso la emisión del **Acuerdo PSAA 16-10554 de 2016**, aplicable al caso objeto de análisis, y en relación con el asunto que nos ocupa fijó las siguientes tarifas de agencias en derecho para el área laboral:

“ARTICULO 5°. TARIFAS. Las tarifas de agencias en derecho son:

- | | |
|-----------------------------|--|
| <i>En única instancia</i> | <i>a. Cuando en la demanda se formulen pretensiones de contenido pecuniario, entre el 5% y el 15% de lo pedido.</i> |
| | <i>b. En aquellos autos que carezcan de cuantía o de pretensiones pecuniarias, entre 1 y 8 smlmv.</i> |
| <i>En primera instancia</i> | <i>a. Por cuantía: Cuando en la demanda se formulen pretensiones de contenido pecuniario</i>
<div style="margin-left: 40px;"><i>(i) De menor cuantía, entre el 4% y el 10% de lo pedido</i>
<i>(ii) De mayor cuantía; entre el 3% y el 7,5% de lo pedido.</i></div>
<i>b. Por la naturaleza del asunto: En aquellos asuntos que carezcan de cuantía o de pretensiones pecuniarias, entre 1 y 10 smlmv.</i> |
| <i>En segunda instancia</i> | <i>Entre 1 y 6 smlmv”.</i> |

Adicionalmente, conviene resaltar que de conformidad con lo indicado en el numeral 1º del artículo 365 del CGP, la condena en costas no procede por un obrar temerario, de mala fe, o doloso de la parte condenada, sino que es el resultado de ser vencida en el proceso, es decir, su imposición se hace de forma objetiva atendiendo la prosperidad de las pretensiones y/o las excepciones; en tanto que su liquidación, por el contrario,

corresponde a criterios ponderativos relacionados con la naturaleza, calidad, duración de la gestión ejecutada por el mandatario judicial, la cuantía de las pretensiones, y demás circunstancias relevantes, dentro de un concepto claro de razonabilidad y proporcionalidad.

Es meritorio entonces apuntar que las normas señaladas establecen criterios de carácter cualitativo y cuantitativo para que el juzgador fije tales agencias, sin que se pueda imponer de manera automática el valor de dicha importe, pues simplemente orientan al juez para que éste, haciendo un ejercicio discrecional ponderativo, fije un monto que considere equitativo, razonable, prudente y proporcional con el valor de la condena o la absolución impartida, justipreciando la duración y calidad de la gestión profesional realizada en el transcurso del proceso, teniendo en cuenta los límites máximo y mínimo fijados por la ley, pero sin que ello signifique que el fallador esté sujeto a fijar como agencias el máximo referenciado.

En síntesis y de acuerdo con lo delineado por la Corte Suprema de Justicia en decisión STC3869 de 2020, la fijación de las agencias en derecho debe seguir los lineamientos que a continuación se enuncian: “... (i) *deben motivarse y determinarse en la respectiva actuación que las genere; (ii) una vez en firme, el secretario del despacho de única o primera instancia, las incluirá en la liquidación de las costas; y de ese trabajo, (iii) el juez o magistrado hará un control de legalidad mediante auto susceptible de reposición y de apelación según corresponda, con el fin de verificar si las aprueba, modifica o dispone su reliquidación*”.

Revisado el expediente, la Sala advierte que en el numeral sexto de la sentencia de primera instancia proferida el 07 de diciembre de 2020 (docs.01 a 03, subcarp.03, carp.01), se establece que las costas se encuentran a cargo del TdeA, fijándose como agencias en derecho la suma total y única de **\$ 1.755.606**; a la par que, en la sentencia de segunda instancia proferida el 21 de mayo de 2021 por esta Corporación, se dispuso que, “...*las costas de primera instancia correrán a cargo del TdeA y a favor del demandante, pues en su contra salieron avante todas las pretensiones subsidiarias incoadas, esto es, el reconocimiento y pago de la pensión de sobrevivientes en subsidio del pago de las cotizaciones y la indexación en subsidio de los intereses moratorios, además de ser la parte vencida en juicio*”, es decir, dejando incólume la condena en costas dispensada por la cognoscente de primer grado.

Así las cosas, de lo que viene de decirse, para la Sala refulge palmar el protuberante error en que incurrió el juzgado de instancia en el auto del 21 de julio de 2023 (doc.08, carp.01), por abierta infracción de los artículos 361, 365 y 366 del CGP al apartarse

injustificadamente del valor de las agencias en derecho que había cuantificado en época pretérita, para fijarlo en la suma de \$ 6.191.673, como se afinsa en la censura; empero, lo enunciado no significa que, deba prohijarse el valor de \$ 1.755.606 reclamado por la institución opugnante, en tanto, se trasluce para la Sala la irrazonabilidad de dicho valor, al no responder a los criterios y al rango de tarifas mínimas y máximas establecidas por el Acuerdo PSAA16-10554 referido, y que ondean entre el 3% y el 7,5% de lo pedido.

De otra parte, no soslaya la Sala que, la juez unipersonal en aras de ajustar el valor de las agencias en derecho, modificó el valor de las mismas fijándolas en una cuantía igual al 7% del valor de las condenas resultantes en segunda instancia [$\$ 88.452.478 * 7\% = \$ 6.191.673$]. Ello así, deviene en equivocada la decisión de la *a quo*, en tanto incumpliendo las directrices explicadas en el punto anterior, fijó las agencias en derecho casi en la tarifa máxima permitida, guarismo que no corresponde a un ejercicio ponderativo equitativo, razonable, prudente y proporcional, a juzgar por la naturaleza, calidad y la duración útil de la gestión desplegada, a sabiendas de que el límite máximo autorizado es el 7,5%, y tanto más importante, pretermitiendo que, conforme con los criterios establecidos en el Acuerdo PSAA16-10554 *“[c]uando las tarifas correspondan a porcentajes, en procesos con pretensiones de índole pecuniario, la fijación de las agencias en derecho se hará mediante una ponderación inversa entre los límites mínimo y máximo y los valores pedidos. Esto es, a mayor valor menor porcentaje, a menor valor mayor porcentaje”*; exhibiéndose una relación inversamente proporcional que caracterizan la especificación de los puntos porcentuales por aplicar de cara al valor de las condenas que finalmente se abrieron paso.

Establecido este punto, la Sala modificará su valor pasando de la suma de \$ 6.191.673, al 5% del valor de las condenas resultantes a la fecha del fallo de segunda instancia, vale decir, la suma de \$ 4.422.623 [$\$ 88.452.478 * 5\% = \$ 4.422.623$]. Como colofón de lo expuesto, y atendiendo a las consideraciones fáctica y jurídicas explicitadas con suficiencia, se dispondrá por la Sala la modificación de la decisión adoptada el 29 de noviembre de 2019 únicamente en cuanto al valor de las agencias en derecho fijadas en primera instancia, fijando un total global de \$ 10.631.149¹ a cargo del TdeA y en favor del señor ROGELIO DE JESÚS VELÁSQUEZ ECHAVARRÍA.

3. COSTAS

De conformidad con lo dispuesto en el **artículo 365 del CGP**, no se impondrán costas procesales en esta instancia, por no haberse causado, en la medida de su no comprobación.

¹ Valor resultante de la sumatoria de: \$ 4.422.263 por la primera instancia, \$ 908.526 en la segunda instancia y \$ 5.300.000, en sede extraordinaria del recurso de casación

En mérito de lo expuesto el **TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE MEDELLIN**, Sala Quinta de Decisión Laboral,

4. RESUELVE

PRIMERO: MODIFICAR el auto objeto de apelación proferido por el Juzgado Primero Laboral del Circuito de Medellín el 21 de julio de 2023, y en su lugar, fijar la suma de \$ 4.422.623 como valor de las agencias en derecho causadas en la primera instancia, a favor del señor **ROGELIO DE JESÚS VELÁSQUEZ ECHAVARRÍA** y a cargo del **TECNOLÓGICO DE ANTIOQUIA (TdeA)**, para un total de \$ 10.631.149, conforme a lo expuesto en las consideraciones de esta providencia

SEGUNDO: SIN COSTAS en esta instancia.

Lo resuelto se notifica **POR ESTADOS**, en los términos previstos en el artículo 41 literal c) del estatuto instrumental laboral.

Déjese copia digital de lo decidido en la Secretaría de la Sala, previa anotación en el registro respectivo, y **DEVUÉLVASE** el expediente al juzgado de origen.

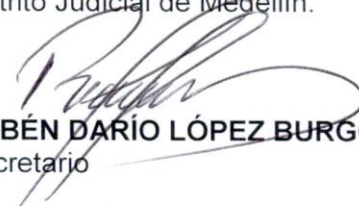
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE


VÍCTOR HUGO ORJUELA GUERRERO
Magistrado Ponente


CARLOS ALBERTO LEBRÚN MORALES
Magistrado


SANDRA MARÍA ROJAS MANRIQUE
Magistrada

CONSTANCIA SECRETARIAL
Se deja constancia de que las anteriores firmas corresponden a las firmas originales de los magistrados que integran la Sala Quinta de Decisión Laboral del Tribunal Superior de Distrito Judicial de Medellín.


RUBÉN DARÍO LÓPEZ BURGOS
Secretario

**LA SECRETARIA DE LA SALA LABORAL DEL TRIBUNAL
SUPERIOR DE MEDELLÍN CERTIFICA:**

Que esta providencia fue notificada en los
ESTADOS No. 162, fijados en la secretaría del
Tribunal, hoy **26 de septiembre de 2023** a las
08:00am,
los cuales pueden ser consultados en
["Publicación de Estados Electrónicos SL-TSM"](#)

RUBEN DARIO LOPEZ BURGOS
Secretario